

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por MARKETING PERSONAL S.A. contra COOMEVA EPS S.A. (Radicado 05001-31-05-006-2020-00423-01).

### **ANTECEDENTES**

La sociedad demandante pretende el pago del auxilio económico por incapacidad que ha asumido y que la entidad promotora de salud a la que varios de sus trabajadores se encuentran afiliados no ha cancelado, con el reconocimiento de intereses civiles, y las costas del proceso.

Como hechos relevantes de cara a sus aspiraciones, narró que su funcionamiento es en la ciudad de Medellín, estando muchos de sus colaboradores afiliados a Coomeva S.A. para la prestación del servicio de salud. Que ha venido pagando a sus empleados las incapacidades que corresponde asumir a Coomeva EPS y que en total suman el valor de \$72.859.122, sin que haya obtenido su reconocimiento pese a las reclamaciones efectuadas.

COOMEVA EPS S.A. en su escrito de respuesta anunció el pago por concepto de incapacidades a la demandante por la suma de \$27.568.800, con aceptación de valores no cancelados por este concepto, pero con la claridad de estar bajo su responsabilidad las incapacidades generadas a partir del tercer día de incapacidad y no por la totalidad de días otorgados. Aun así, formuló las excepciones de mérito de pago parcial, prescripción, reconocimiento de incapacidades por parte de la EPS a partir del segundo día y buena fe.

El liquidador fue debidamente notificado de la existencia del proceso a satisfacción de lo que pregonan el numeral 5° del artículo 2.4.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 (Archivos 21 y 22).

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia que profirió el 19 de septiembre de 2022, DECLARÓ probada la excepción de pago por la suma de \$27.568.800 y la excepción de prescripción del derecho al pago de la suma de \$319.677. CONDENÓ a Coomeva EPS S.A. a pagar a la sociedad demandante la suma de \$44.970.645 por concepto de reembolso de incapacidades a trabajadores afiliados a dicha EPS, imponiendo los intereses que se establezcan en el proceso de liquidación. CONDENÓ a Coomeva EPS S.A. en costas, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.300.000.

La EPS demandada, por medio de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación el cual le fue concedido. Con él aspira que se revoque la decisión en tanto considera que según el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto 2943 de 2013 no es responsabilidad de las EPS el reconocimiento de los dos primeros días de las incapacidades y así fue emitida la condena; además que Coomeva está regida por un régimen jurídico aplicable distinto a quienes tengan reclamaciones de cualquier índole y debieron ser radicadas ante la liquidación siguiendo el procedimiento establecido, sin que la demandante se haya hecho presente en el proceso para que su acreencia fuera graduada y liquidada pese a toda la difusión que se dio, siendo dispuesta desde el 27 de mayo de 2021 la intervención forzosa, y desde enero de 2022 ordenada la liquidación, sin que pueda darse un trato especial a la deuda, porque ello atentaría contra el principio de igualdad.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

Es del caso resolverse como problema jurídico, si dentro del saldo condenado existen inclusiones por fuera de la legalidad, y si en el marco de la liquidación a la que fue sujeta la convocada por orden de la Superintendencia Nacional de Salud es improcedente la orden emitida.

Para resolver, cabe rememorar que como es bien sabido, existen reglas claras y precisas que las partes deben y tienen que cumplir o propender porque se cumplan, si aspiran a que sus peticiones sean reconocidas. Entre las más relevantes deben traerse a colación las establecidas en los artículos 164 y 167 del C.G. del P. (Ley 1564 de 2012) aplicables por analogía al procedimiento laboral, las mismas que consagran el principio de la necesidad de la prueba y la regla de la carga de la prueba, respectivamente, de donde se desprende que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso.

Atendiendo los argumentos del recurso, y en el marco del asunto discutido, las pautas vigentes para el reconocimiento de incapacidades ya sea por enfermedad de origen común o laboral, están contenidas en la Ley - Ley 100 de 1993, Decreto 2463 de 2001, Decreto 019 de 2012, Decreto 776 de 2002 y Ley 1562 de 2012-.

En ese orden, es claro que el artículo 1° del Decreto 2943 de 2013 dispone la responsabilidad a cargo de cada empleador de cubrir los dos primeros días de incapacidad de las personas que trabajan a su servicio, y es a partir del tercer día y hasta el día 180 que la EPS se encarga de asumir este concepto frente a sus afiliados, estando aceptado por la convocada desde su escrito de respuesta que en efecto, existe un saldo pendiente de pago en favor de Marketing Personal S.A. por ese rubro de la seguridad social, sociedad que lo

ha asumido en virtud a la responsabilidad asignada por el artículo 121 del Decreto 19 de 2012.

Así, en razón al primer punto de disenso, se tiene que lo que revela el argumento dealzada, es que la oposición radica en los dos días que recaen en la parte empleadora para de allí dar disminución al saldo condenado, encontrando que tratándose de una discrepancia presentada desde el escrito de respuesta y atendiendo los parámetros de la carga de la prueba, era a la pasiva dado su argumento de defensa, a quien le correspondía arribar las probanzas con las cuales pudiera definirse que en efecto, los dos días fueron incluidos en el valor total de la deuda bajo desconocimiento de la ley, donde debió valerse de la documental idónea necesaria para demostrarlo, con atención a la posibilidad de estar ante casos en los cuales existió hospitalización, donde el auxilio económico por incapacidad desde el primer día es asumido directamente por la EPS.

Y es que demostrar los valores a cargo de la EPS era una carga probatoria de fácil acceso para Coomeva donde bastaba arribar las incapacidades para en contraposición a lo cobrado, determinar lo acertado del argumento y definir los valores a reconocer; pero habiendo la enjuiciada omitido presentar las pruebas correspondientes, debe decirse que no se cuenta con los elementos necesarios y suficientes para derruir las sumas ordenadas en primer grado.

En ese orden, como la convocada se limita a mencionar la irregularidad de los dos días, pero ningún soporte probatorio promueve siendo su responsabilidad procesal, sin que se cuente con otro vestigio del que la autoridad judicial pueda extraer tal circunstancia anunciada, es que se imposibilita dar modificación a la condena emitida, de donde surge que los valores condenados corresponden a los que la EPS en virtud a la disposición legal debe asumir como prestadora de los servicios de salud de los afiliados colaboradores de la demandante, sobre quienes se cubrió directamente algún subsidio por incapacidad.

Ahora, sobre la imposibilidad de pronunciarse de fondo en el asunto por el hecho de estar la demandada inmersa en un proceso de liquidación ordenado por medio de la Resolución N° 2022320000000189-6 de 2022 expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud, sin que la activa haya arribado el crédito para ser incluido en los pasivos de la EPS, es necesario precisar primero, que la imposibilidad de dar continuidad a los trámites judiciales donde intervenga Coomeva EPS es atinente a los procesos de ejecución o cobro para que hagan parte del proceso concursal de acreedores siendo graduados y calificados por el liquidador, o a acciones nuevas contra la entidad, por lo que tratándose de un proceso declarativo que tuvo su inicio previo a impulsarse incluso la toma de posesión de los bienes y haberes de Coomeva EPS (Págs. 9-21 Archivo 16), se da vía para dar agotamiento a lo convocado, porque mientras se encuentre vigente el trámite de liquidación la persona jurídica todavía tiene capacidad de ser parte y es sujeto de derechos y obligaciones.

Ahora, es cierto que no obra prueba que lo aquí discutido haya sido relacionado en el proyecto de reconocimiento y graduación de créditos, y de hecho es un acto dentro del procedimiento de liquidación del que no se verifica su ocurrencia; sin embargo, basta decir que ello no es óbice para que a través de este escenario se determine el deber a cargo de Coomeva y se defina su deuda, pues aun cuando este acreedor no haya sido relacionado en el inventario de acreencias y en el correspondiente proyecto de reconocimiento y graduaciones de créditos, es de suyo hacer efectivas las obligaciones a su cargo, lo que podrá realizar a partir de las herramientas con las que cuente, sea persiguiendo los bienes que queden del trámite concursal, o con la reclamación de los daños causados sin perjuicio de las demás acciones judiciales que procedan.

Incluso, es posible dada la aceptación del adeudo desde el escrito de respuesta presentado el 31 de agosto de 2021 - *antes de ser ordenada la liquidación* -, que el crédito haya sido relacionado con la determinación de su cuantía como un crédito litigioso, por ser originado con anterioridad a la fecha del inicio del proceso y que en ese orden, se cuente con una provisión para atender su pago con atención de la prelación legal.

De ese modo, las circunstancias anunciadas en el recurso, no tienen cabida para proceder con la revocatoria de lo decidido, pues ha quedado claro desde el momento en que la demandada impulsó su pronunciamiento, que existe

entre las partes una deuda pendiente que el proceso de liquidación no extingue ni impide a las autoridades judiciales pronunciarse sobre la misma.

Así las cosas, el recurso de apelación de la demandada no prospera, lo que implica la confirmación íntegra de la providencia.


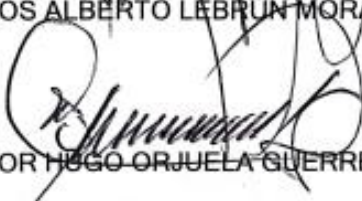

Siguiendo los lineamientos del artículo 365 del CGP, en esta instancia las costas son a cargo de la EPS Coomeva, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia materia de apelación de fecha y procedencia conocidas. Las costas son como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310500620200042301</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>MARKETING PERSONAL S.A.</b>
<b>Demandado:</b>	<b>COOMEVA EPS</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>10/08/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>CONFIRMA</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 11/08/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario